

su lugar declaramos el derecho del recurrente a percibir la asignación por residencia en la plaza de Melilla sobre su sueldo real y efecto de Capitán de Ingenieros de 37.500 pesetas anuales, debiendo abonársele los atrasos devengados con anterioridad a 31 de diciembre de 1966 y con la limitación de los cinco años que ordena la Ley de Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911, debiendo fijarse en ejecución de sentencia las cantidades que deben ser abonadas al recurrente, condenando a la Administración al cumplimiento de lo expuesto, y absolviéndola de las demás pretensiones de la demanda; sin hacer especial condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años  
Madrid, 10 de septiembre de 1968.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

*ORDEN de 11 de septiembre de 1968 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 14 de junio de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Braulio Ferreras Llamas, don Antonio Guillén Otero y don Pedro Díaz de Ibarra y Mayayo.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Braulio Ferreras Llamas, don Antonio Guillén Otero y don Pedro Díaz de Ibarra y Mayayo, representados por el Procurador don José Granados Weill, bajo la dirección de Letrado, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio del Ejército de 14 de junio y 4 de septiembre de 1967, denegatorias de su petición de indemnización por privación de vivienda, se ha dictado sentencia con fecha 14 de junio de 1968, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos los recursos contencioso-administrativos interpuestos por don Braulio Ferreras Llamas, don Antonio Guillén Otero y don Pedro Díaz de Ibarra y Mayayo contra las resoluciones del Ministerio del Ejército de 14 de junio y 4 de septiembre de 1967, que les denegaron la indemnización por privación de vivienda militar, resoluciones que por hallarse ajustadas a derecho, confirmamos en todas sus partes; sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial, digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.  
Madrid, 11 de septiembre de 1968.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

*ORDEN de 11 de septiembre de 1968 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 25 de junio de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Tejeiro Rebollo.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Antonio Tejeiro Rebollo, Comandante de Ingenieros, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración

Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resoluciones de 16 de julio y 5 de septiembre de 1967, sobre rectificación de trienios, se ha dictado sentencia con fecha 25 de junio de 1968, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que sin hacer especial imposición de costas y estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Tejeiro Rebollo contra las resoluciones del Ministerio del Ejército de 16 de julio y 5 de septiembre de 1967, declaramos no ajustadas a derecho y nulas las últimas, y en su lugar resolvemos que el recurrente tiene derecho a que se le compute como trienios de Oficial todo el tiempo servido y que media desde el día 6 de septiembre del año 1935 hasta el 2 de mayo de 1967, sin perjuicio del que después le sea legalmente abonable. Mandamos a la Administración que adopte las medidas precisas y conducentes para la plena efectividad del derecho declarado.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial, digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.  
Madrid, 11 de septiembre de 1968.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.

*ORDEN de 11 de septiembre de 1968 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 20 de junio de 1968 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro Sánchez del Río Píson.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Pedro Sánchez del Río Píson, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio del Ejército de fecha 20 de mayo y 8 de julio de 1967, sobre plus circunstancial, se ha dictado sentencia con fecha 20 de junio de 1968, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos en parte la causa de inadmisibilidad del recurso alegada por el Abogado del Estado en cuanto las resoluciones en él impugnadas del Ministerio del Ejército de 20 de mayo y 8 de julio de 1967 se refirieron a lo solicitado por el recurrente respecto a la base para tener en cuenta para el percibo del plus circunstancial, y que debemos estimar y estimamos en parte dicho recurso contencioso-administrativo entablado por don Pedro Sánchez del Río Píson contra las mencionadas resoluciones por no ser conforme a derecho en cuanto concierne a la asignación de residencia, anulándolas y dejándolas sin valor ni efecto en cuanto a ese extremo, y en su lugar reconocemos el derecho que le asiste al actor a percibir dicha asignación durante su permanencia en Santa Cruz de Tenerife hasta la entrada en vigor de la Ley de 28 de diciembre de 1966, calculando el porcentaje del cuarenta por ciento no sobre el sueldo de la escala general, sino sobre el presupuestario asignado a su empleo en el Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción, condenando a la Administración a estar y pasar por esta declaración y al pago de la cantidad a que asciende la diferencia respecto a lo abonado por tal concepto; sin hacer especial declaración de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa» lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial, digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.  
Madrid, 11 de septiembre de 1968.

MENENDEZ

Excmo. Sr. General Subsecretario de este Departamento.